

EL AMIGO DEL OBRERO

REDACTORES:

Dr. Luis Pedro Lengua-Dr. Miguel Perce
Secretario de Redacción: Juan N. Quagliotti
Redacción: Daymán 116

CORRESPONSALES:

En Roma—Monseñor G. Yanguenillo
En París—Francisco Venturi
En Friburgo—Max Turmann
En Madrid—José M. Garçon

Órgano de los Círculos Católicos de Obreros del Uruguay
APARECE LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS

ADMINISTRACIÓN: Daymán 126—Administrador: LUIS PASTOR

Teléfono: LA COOPERATIVA núm. 639

Suscripción en la Capital (por mes) \$ 0,20 | En campaña (semestre adelantado) \$ 1,20
No se pague ningún recibo que no lleve el sello de la Administración.

Indicador cristiano

Sábado 13—Stos. Hipólito, Casiano, Juan Berchmans y Concordia, *Ayuno y abstinencia*.

Domingo 14—Stos. Calixto y Marcello, obs. y mrs., Demetrio, mr. y Eusebio, pb.

Lunes 15—La Asunción de N. Sra. Stos. Napoleón y Tarsicio, mrs.

Martes 16—Stos. Jacinto, Roque y Tito, diác., Ambrosio y Centurión, mrs.

Miércoles 17—Stos. Pablo, Bonifacio y Severo, mrs., Anastasio, ob. y Juliana, mr.

El Amigo del Obrero

MONTevideo 18 DE AGOSTO DE 1910

Discusiones parlamentarias

Brillante discurso
del Dr. Vicente Ponce de León,
diputado
por San José

El martes pasado se reanuda en la Cámara de diputados la discusión de la ley de Asistencia Pública Nacional, considerándose el artículo 20, del que hemos tratado editorialmente.

El Dr. Salterain pronunció un elocuente discurso pidiendo el rechazo del artículo, deteniéndose en su peroración a demostrar con estadísticas irrefutables que la beneficencia manejada por el Estado resulta siempre más onerosa que la beneficencia de carácter privado. Con estadísticas de los hospitales oficiales de Francia y de los hospitales particulares de esa misma nación, dejó su afirmación en pie.

A ese distinguido orador siguió en el uso de la palabra nuestro correligionario Dr. Vicente Ponce de León pronunciando un discurso notable y brillante que no pudo terminar en esa sesión, debiéndolo continuar en la de hoy pues el jueves no se formó quórum.

He aquí las partes principales de ese discurso:

Entrando al debate

Señor Ponce de León—Yo apoyo, señor Presidente, las conclusiones a que ha llegado el doctor Salterain en su inteligente discurso.

Aunque ya mis opiniones sean conocidas por la intervención que he tenido en los diálogos y en las interrupciones a los que he dado lugar este debate, me creía obligado a dejar más claramente manifestada mi manera de pensar respecto a este artículo, y las poderosas razones que tengo para pedir que la Cámara no lo preste su sanción.

El artículo que se discute, dice así: «Los Hospitales y Asilos departamentales que hayan sido fundados y sostenidos con recursos públicos o por suscripciones populares, o que hayan gozado de exenciones de impuestos, son declarados establecimientos nacionales, y los fondos y bienes de estas instituciones se traspasarán a la Asistencia Pública Nacional».

Señor Presidente: a mi juicio, y respetando las opiniones que no comparto en la mía, creo que, si ese artículo se aprueba, tendría razón el doctor Salterain cuando lo calificaba de un confesional, tendría razón el doctor Moratorio Palomeque cuando decía que era una expropiación gratuita, y que podría casi afirmarse que él entraría en una apropiación indebida.

Sosteniendo este artículo, el doctor Amézaga, en el interesante discurso que pronunció en las sesiones ordinarias, decía que el principio jurídico que lo informa es tan viejo como el Universo.

Le reconozco una gran preparación al doctor Amézaga en todos los asuntos a que interviene; la opinión que tengo de su inteligencia y de sus conocimientos, es grande; pero a pesar de ese reconocimiento que hago de la intelectualidad de mi contrincante, afirmo que en este debate es el único que no dijo; realmente, el principio que informa este artículo es muy viejo: el primer hombre que lo dijo al otro: «lo tuyo no es tuyo, sino mío», fue el padre espiritual de este artículo.

Las citas de autores

La Comisión, señor Presidente, tanto la que preparó este proyecto, como la informante de nuestra Cámara, han creído conveniente reforzar sus avanzadas doctrinas con las citas de autores.

Las citas de autores, cuando se sacan de aquí y allá retazos de sus obras, suelen a veces no expresar en realidad sus propias opiniones.

Así por ejemplo, encuentro yo en la página 2 del Informe de la Comisión, una cita de Lo Play que dice: «Una de las necesidades de toda organización social, es socorrer a aquellos que no

pueden por sí mismos proveer a las necesidades de su familia. No hay teoría que pueda justificar el abandono de los que sufren».

Doncuerdo con esas ideas—dice el informe,—se estableció en el artículo 20, del proyecto las personas a quienes se debe asistencia; es decir, que las ideas de Lo Play sirvieron de fundamento a la Comisión para redactar algunos de los artículos.

Pues bien: Lo Play, hace más de cuarenta años, se reveló contra la intervención incesante del Estado, que es el espíritu que anima este proyecto de asistencia pública.

«Los escritores», escribía Lo Play, «que se apresuran a pedir en todas las cosas las tutelas del Estado, han recurrido a menudo a él para curar las llagas del pauperismo. Todo lo que yo he observado, lejos de justificar este género de intervención, ha demostrado, al contrario, su peligro. El Estado ha contribuido en primer término, por su espíritu invasor, después por sus medidas revolucionarias, a desorganizar entre nosotros los patronatos y a crear el antagonismo».

Un cuento del Dr. Palomeque

«Las citas de autores! No hay hipótesis, por extravagante que sea, que no haya tenido su defensor. A ese respecto, recuerdo que en este mismo recinto el doctor Palomeque contó una vez aquel cuento del paisano que fué a consultar a un abogado, con motivo de un pleito que le habían iniciado. El letrado, después de oírle, le dijo, señalando una parte de su biblioteca: «Mire, todos los autores que están en esta parte de la biblioteca le dan a usted la razón». El pobre hombre, con esta categórica opinión siguió el pleito y lo perdió, y como es natural, llevó su queja al que lo había engañado, quien en forma que no admitía respuesta le dijo: «es cierto que yo dije que todos estos autores le daban la razón; pero se me olvidó decirle que todos estos otros se la quitaban». Lo mismo pasa aquí. Hay autores que opinan como opinan los señores de la Comisión; pero mucho más piensan de distinta manera.—Pero no se trata de saber si nos importa, lo que han sostenido algunos autores cuyas doctrinas pretendemos implantar precipitadamente en momentos en que empezamos a estar desprestigiados en Europa, sino lo que pensamos los que se sentaron en estas bancas antes que nosotros y os dieron leyes a la sombra de las cuales se han constituido personas morales capaces de derechos y obligaciones, que adquirieron propiedades de las cuales pretendemos despojarlos».

En ese sentido lo empezamos por lo que pudieran hacer nuestros constituyentes y no hicieron.

El principio de derecho

En el momento en que se formaban estas democracias todavía mal organizadas, las ideas de la Revolución Francesa predominaban en todas partes e impresionaron muchos de sus primeros actos. Esta es una tesis que ha desarrollado y probado con gran brillantez mi queridísimo amigo el doctor Luis Alberto de Herrera en su reciente libro. Pues bien: nuestros constituyentes, que se dejaron influenciar en algunas cosas, no siguieron a la Revolución Francesa respecto a este asunto. A pesar de que sabían que la Convención francesa de 1794, había votado un artículo muy parecido al que se pretende que votemos ahora, declarando bienes nacionales todos los pertenecientes a hospitales y a hospitales de caridad.

Ya sea porque nuestros Constituyentes conocieron el desastre que fué para la caridad francesa la aprobación de esa medida, o ya sea porque tenían un respeto más profundo por la propiedad, el hecho es que ellos pusieron en la Constitución el artículo 144 que declara que la propiedad era un derecho sagrado e inviolable: «sagrado e inviolable» fueron las palabras especiales que pusieron, para mostrar la importancia de lo que querían decir.

Consecuencias legales

Sentado el principio, todas las leyes que vinieron después tuvieron que ser concordantes con el modelo.

Tenemos por lo pronto el artículo 21 del Código Civil que define lo que son personas jurídicas. Dice: «Se consideran personas jurídicas, y por consiguiente capaces de derechos y obligaciones civiles, el Estado, el Fisco, el Municipio, la Iglesia y las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidos por la autoridad pública».

Es decir, establecimientos y asociaciones reconocidos por la autoridad pública; por consiguiente, personas capaces de derechos y obligaciones civiles. Estos establecimientos y asociaciones reconocidos por la autoridad pública son: el hospital de Minas, la Sociedad de Beneficencia de San José, el hospital de Melo y todos los que están en igual caso, que al adquirir su personería jurídica se han hecho personas, de acuerdo con la ley, capaces de derechos y obligaciones, por lo cual los bienes que han adquirido por compra, por legados o por donaciones de los particulares o del Estado, son bie-

nes del hospital, son bienes de la propia sociedad.

Este artículo está relacionado con otros artículos del Código. El artículo 429 habla de los bienes con relación a las personas, y dice que: «Los bienes son de propiedad nacional o particular». El artículo 431, define los que son bienes nacionales, y el artículo 438 agrega que «los bienes que no fueron de propiedad nacional, deberán considerarse como bienes particulares, sin hacerse distinción de las personas que tengan la propiedad de ellos, aunque sean personas jurídicas». Es decir, que la ley no quiere que se hagan distinciones respecto de las personas que son dueñas de los bienes particulares, aunque estas sean personas jurídicas.

Enseñando al que no sabe

Tenemos en el mismo Código otros artículos, que garantizan, una vez más la legitimidad de los bienes adquiridos por las sociedades que nos ocupan. El artículo 931 habla de los legados, y dice: «Cuando se deja algo a alguna persona para que lo tenga por suyo en la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarlas a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva». «Si pareciera dudosa la intención del testador, se juzgará que la disposición es modal».

Esto es el caso de los legados dejados a las sociedades para levantar hospitales; son disposiciones modales que están amparadas por la ley.

«El modo no suspende la adquisición del derecho, ni su ejercicio», dice el artículo 932. «Lo dejado modalmente puede pedirse desde luego, sin necesidad de dar fianza de restitución para el caso de no cumplirse el modo».

Puede haber en las disposiciones modales cláusulas «resolutorias», las que imponen la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo. Y agrega el artículo 933: «No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa».

«Si el hecho que constituye el modo,—dice otro artículo,—es por su naturaleza imposible, contrario a las buenas costumbres, o prohibido por las leyes, no valdrá la disposición; pero nunca para pasar esos bienes al Estado, agregó yo».

«Si el modo, sin hecho o culpa del gravado, es solamente imposible en la forma prescrita por el testador, deberá cumplirse en otra análoga que no altere la sustancia de la disposición, y que en este concepto sea aprobada por el Juez, con citación de los interesados».

«Si el modo se hace enteramente imposible, sin hecho o culpa del gravado, subsistirá la disposición sin el gravamen». Es decir, que si en el hospital de San José, por ejemplo, es el que yo más conozco, se hace imposible, por disposición del Estado, el que la donación hecha por el doctor Antonio María Pérez se siga aplicando para el hospital, que se levantó con ese donativo, por nuestro Código Civil, la Sociedad de Beneficencia sería dueña exclusiva de ese bien. Es una disposición que viene a echar por tierra el artículo 20 de la ley.

Los puntos sobre las i

Estos artículos, recordados por mí, no se encuentran en los Códigos europeos; explican también en cierta manera las disposiciones que se han tomado en Europa contra los institutos de caridad, y que son los que nosotros pretendemos imitar. Las disposiciones modales fueron sacadas del Código chileno. El Código francés, por ejemplo, tiene disposiciones que no concuerdan con las nuestras, y que interpretada por los tribunales franceses, han traído por consecuencia las leyes que han despojado a muchas sociedades privadas de los bienes que poseían.

Nosotros no tenemos ni el artículo 900 ni el 910 del Código francés. El primero dice: «En toda disposición entre vivos o testamentaria, las condiciones imposibles, las que son contrarias a las leyes o a las costumbres, se reputarán no escritas»; es decir, que la disposición valdrá. Nuestro artículo 935 dice: que la disposición será nula, es decir, que el legado volverá a la herencia. El artículo 910 del Código francés dice: «Las disposiciones entre vivos o por testamento en beneficio de los hospitales, de los pobres de una comuna o de establecimientos de utilidad pública, no tendrán efecto mientras no sean autorizadas por el gobierno». Si nosotros tomamos nuestro Código, veremos que no encontramos una disposición que diga lo que dice el Código francés.

Ha sido citado el artículo 760, que dice lo siguiente: «Toda disposición a favor de persona incierta, es nula, a menos que por algún evento pueda resultar cierta. Valdrán, sin embargo, las disposiciones pías o de beneficencia, debiendo observarse lo dispuesto en el capítulo 2.º de este título».

Y el capítulo 2.º de este título dice: «La disposición hecha a favor de un establecimiento de beneficencia sin designarlo, se aplicará al establecimiento

de esa clase que el Presidente de la República designe, preferiendo alguno del Departamento o pueblo del testador»; es decir, que no depende la validez de un legado de la autorización del Gobierno,—aun en el caso de que se deje ese legado sin designar el instituido o la obra a que se quiere aplicar—comodice el Código francés—la designación es lo único que depende del Presidente de la República; pero cuando la disposición o el legado se ha hecho a un establecimiento señalado, a él hay que entregar el bien dejado, sin necesidad de consultar a nadie, ni depender de su autorización.

Se ve, pues, que nuestro derecho codificado no se presta a duda. No hay artículo ninguno que pueda interpretarse en el sentido de la doctrina que enseña el artículo 20 de este proyecto.

La doctrina del despojo

Nosotros tenemos la persona jurídica aceptada por el Código, que la hace capaz de derechos y obligaciones; tenemos las disposiciones modales, que hacen propietarios de inmediato a la persona o al instituto en favor del cual se hace el beneficio mientras no se lo ponga una cláusula resolutoria, en cuyo caso la condición resolutoria lo que hace es hacer retrotraer el capital y los frutos a los herederos de la persona donante. A los herederos del testador, pero nunca al Estado, nunca a declarar como bienes vacantes los bienes de las instituciones que tienen personería jurídica. Entre nosotros la persona jurídica es una persona como otra cualquiera, está completamente autorizada por la ley, y sólo por un despojo, que podrá legitimarse si se aprueba este artículo, pero que será siempre un despojo...

Señor Lagarrilla—Entonces el señor diputado cree que la sociedad de San José puede levantar bandera de rebeldía...

Señor Ponce de León—Yo creo que sí.

Señor Manini Ríos—¿Cómo va a poder, si es una violación?

Señor Ponce de León—Puede señor y en último caso, si el Estado lo arrebatara...

Señor Manini Ríos—¿Cómo cumple el legado?

Señor Ponce de León—El legado del doctor Antonio María Pérez a la Sociedad de Beneficencia que se había establecido en San José en 1831, fué hecho el año 1831. Este señor, que era abogado, previó con una clarividencia profética lo que podía pasar en el porvenir, que el Estado lo arrebatara a la Sociedad de Beneficencia esos bienes, y puso en el testamento que dejaba diez y ocho y tantos mil pesos para la fundación de un hospital en San José, siempre que fuera administrado por la Sociedad de Beneficencia, y en caso que por cualquier circunstancia pasara al Estado ese hospital, los albaceas quedaban autorizados para reivindicar para sus herederos esos bienes.

Eso está en el testamento del doctor Pérez.

Yo no sé con qué derecho el Estado...

Señor Manini Ríos—Pero la Sociedad de Beneficencia no podría plantar bandera de rebeldía y apropiarse de esos bienes.

Señor Ponce de León—Cómo no! de acuerdo con las disposiciones modales o sea con el artículo 935 del Código Civil.

Señor Manini Ríos—Pero la Sociedad de Beneficencia no puede apropiarse de esos bienes: esos bienes reverterán a los herederos del doctor Pérez.

Señor Ponce de León—Perfectamente.

La parte del León

Señor Moratorio Palomeque—Cada hospital está en una situación distinta. Es una cuestión completamente excepcional, porque el hospital de Melo ha sido construido por una sociedad que durante cerca de treinta cinco a cuarenta años, ahorró peso tras peso, y con ese dinero empezó a edificar ese hospital, y cuando el Estado lo dió \$ 10.000,00 para continuar las obras, fué en carácter especial, y con condición de devolverlas en caso de que no prestara determinados servicios.

Señor Manini Ríos—Deiz mil pesos, exoneración de impuestos y afectación del impuesto de Abasto. De manera que la comunidad que paga el impuesto, lo hace a beneficio de ese hospital.

Señor Moratorio Palomeque—El impuesto de Abasto, que según la ley se debía entregar a la Comisión de Cerro Largo, no lo han entregado; los pesos están depositados en el Banco, con violación notoria de la ley. De manera que el hospital de Melo no le debe al Estado ni siquiera la subvención esa. Es una sociedad jurídica, y arrebatado al hospital eso, lo sostengo, y lo diré siempre, es absolutamente inconstitucional.

Señor Lagarrilla—Si no ha recibido nada del Estado, no entrará en esta disposición.

Señor Moratorio Palomeque—Pero con esta ley, ustedes se lo apropiaron. Basta la exención, para que se lo apropien. Con ese principio no escapará ninguna persona jurídica que esté en esas condiciones.

Señor Ponce de León—¿Qué institución hay hospitalaria, sobre todo, que no haya recibido exención de impuestos? Eso es una cosa que cae de su peso.

Yo recuerdo un refrán vulgar de cuando era muchacho, y todos lo conocerán: «quero al que da y quita, el diablo lo crea una jorobita».

Esto es peor todavía: no sólo se quiere arrebatarse lo que se dió, sino que se quiere arrebatarse lo que dieron otros.

«No era nada lo del ojo, y lo llevaba en la mano»

Señor Lagarrilla—Arrebatarse la propiedad, ¿para qué, señor diputado?... Yo concibo que haya atentado cuando se le quita derechos; pero que se lo extima de una obligación, no veo que sea atentado.

Señor Ponce de León—¿Cómo no va a haber atentado, señor diputado!

Señor Lagarrilla—Pero si el Estado lo tomara para venderlo, sería atentado; pero si lo toma para mejorarlo, no puede ser atentado.

Señor Ponce de León—Con ese argumento mañana se apoderaría de mi estancia, si yo fuera estanciero, diciéndome que es para mejorarla, que yo estoy a la antigua, que no refino.

Señor Manini Ríos—¿Y no se apoderan de una estancia, en el caso de utilidad pública, por expropiación?

Señor Ponce de León—¡Pero la pagan!

Señor Manini Ríos—Pero en ese caso, ¿a quién va a pagar el Estado?

Si no es un propietario, es administrador!—(Murmullos).

Señor Presidente—(Agitando la campanilla). Orden, señores diputados. Tiene la palabra el doctor Ponce de León.

Señor Ponce de León—He leído los artículos del Código, que dan derecho a las personas personas jurídicas, le dan propiedad...

Señor Manini Ríos—No: le dan derecho a contraer obligaciones.

Señor Presidente—Los diálogos son inconvenientes, señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado Ponce de León.

A mayor abundamiento

Señor Ponce de León—Si el hecho que constituye el modo, dice el artículo 935 del Código Civil, es por su naturaleza imposible, contrario a las buenas costumbres, o prohibido por las leyes, no valdrá la disposición.

«Si el modo, sin hecho o culpa del gravado, es solamente imposible en la forma prescrita por el testador, deberá cumplirse en otra análoga que no altere la sustancia de la disposición, y que en este concepto sea aprobada por el Juez, con citación de los interesados».

«Si el modo se hace enteramente imposible, sin hecho o culpa del gravado, subsistirá la disposición sin el gravamen».

Señor Manini Ríos—¿Usted concibe que sea imposible la caridad en algún momento? ¿que se haga imposible el mantenimiento de un hospital?... Luego el gravado estará obligado siempre.

Señor Ponce de León—El doctor Antonio María Pérez, dió un legado para que se implantara un hospital, con la condición expresa de que lo administrara la Sociedad de Beneficencia, y decía leyendo en el porvenir, que si el Estado alguna vez se apropiara de esos bienes, él pedía a sus albaceas que reivindicaran esos bienes para sus sucesores.

De manera que me parece que es violar abiertamente la voluntad del donante, que fundó el hospital de San José.

Señor Arena—Los albaceas habrán muerto.

La Cámara frente a sí misma

Señor Ponce de León—Lo curioso, señor Presidente, es que esta Cámara ha sostenido estas mismas opiniones que estoy sosteniendo, sin discrepancia de un solo diputado.

En 1904, un Mensaje del Poder Ejecutivo solicitaba, a pedido de la Comisión del Hospital de Minas, que la Cámara se sirviera interpretar el artículo 13 de la Ley Orgánica de Juntas, que hacía pasar a la Comuna toda la caridad oficial.

La Cámara de aquel entonces, que era la legislatura pasada, produjo un informe que no pudo ser tratado. Este informe estaba firmado por el doctor Alvaro Guillot, el doctor Rodríguez Larreta, el doctor Pérez Olave y el doctor Massera. Como he dicho, no se pudo tratar entonces este asunto.

Vino más tarde la Cámara actual, y en la Cámara actual dijo la Comisión de Códigos:

«Vuestra Comisión hace suyo el informe presentado por la anterior», y firmaban ese informe el doctor Mendivil, como miembro informante, el doctor Pérez Olave, el doctor Vidal Belo, el doctor Massera y el doctor Rosalío Rodríguez.

Y qué se decía en ese informe, señor Presidente? Se decía que el Hospital de Minas que había sido establecido en 1894 como sociedad privada, se había sometido y puesto a disposición del Ministro de Fomento a los efectos del

nombramiento de Comisiones; pero dejando constancia de que era un establecimiento de beneficencia fundado por la iniciativa particular, destinado a la asistencia médica y quirúrgica gratuita de los enfermos pobres de solemnidad, y a la remuneración de los enfermos pudientes; que quedaría confiada su administración a una Comisión compuesta de doce miembros, entre los cuales habría uno o más médicos, nombrados por el Poder Ejecutivo.

Cuando pidió la personería jurídica, el señor Fiscal de Gobierno hizo notar que el artículo 4.º no debía aprobarse; que debía hacerse que el hospital dependiera de la Junta Económico-Administrativa.

Se lo dió vista a la Comisión del hospital de Minas de esa opinión, y la Comisión dijo que no; que aceptaba depender del Ministro de Fomento; pero que no deseaba depender de la Junta de Minas.

¡Si aún hay más!

Y, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Con fecha 25 de Abril de 1895 el Gobierno resolvió el pedido, declarando que «no obstante lo dictaminado por el señor Fiscal, acordaba al Hospital de Minas la personería jurídica en la forma solicitada, con dependencia directa de Ministerio de Gobierno, con arreglo a lo establecido en el artículo 4.º de los estatutos y a los efectos determinados por el artículo 21 del Código Civil».

Ahora bien; llega el año 1903, y cuando la Comisión del Hospital de Minas ya había levantado varios pabellones, se presentó al Gobierno pidiendo que nombrara su Comisión, porque la otra cesaba, y el Gobierno resolvió que pasara a la Junta, de acuerdo con el artículo 13 de la ley de Juntas.

Reclamó la Comisión de Minas; se formó un expediente, y es bueno conocer las opiniones de los Fiscales que asesoraron al Poder Ejecutivo.

El señor Fiscal de Gobierno, después de recordar su primitiva opinión recaída en el petitorio de personería jurídica, agregaba que: «el Poder Ejecutivo, al aprobar los estatutos, no aceptó la modificación propuesta por el infrascripto; sostuvo el artículo 4.º tal como había sido presentado. En consecuencia, debe estarse a lo que dicho artículo establece, tanto más cuanto el artículo 13 de la Ley de 10 de Julio se refiere a lo concerniente a la «caridad oficial», y la índole del Hospital de Minas no es oficial sino particular».

Se corrió la vista al señor Fiscal de Hacienda, el doctor Garzón; y el doctor Garzón, cuya opinión me parece que vale tanto como la de cualquier otro autor, dijo: «No es ese Hospital un establecimiento público, propiamente dicho, sino más bien un establecimiento de índole privada, desde que él ha sido fundado y construido por particulares, con calidad de ser también administrado por éstos o por una comisión especial que los representará en todos los actos civiles y de administración, con arreglo al reconocimiento de personería jurídica hecha a su respecto por el Poder Público. Estos estatutos así aprobados, importan, con relación al Estado y al hospital del departamento de Minas, algo así como un contrato o convención solemne al que debe estarse».

Esto decía el doctor Garzón en ese luminoso informe...

Y vengan interrupciones

Señor Mendivil—Pero, señor diputado: ahí lo que estaba en tela de juicio era si la Comisión debía nombrarla el Poder Ejecutivo o la Junta.

Señor Ponce de León—Me parece que las opiniones que acabo de leer, no dicen si corresponde solamente a la Junta o no, sino que dicen que es un convenio solemne al cual estarse...

Señor Lagarrilla—A los efectos de la legislación vigente.

Señor Repetto—Se trataba de interpretar la ley y no de hacer una ley nueva.

Señor Mendivil—Se trataba de interpretar la ley de Juntas de 1903: si las disposiciones de la ley de Juntas regían o no sobre un detalle.

Señor Ponce de León—La ley les da derechos a los hospitales a tener propiedades; y eso es lo que yo he sostenido.

Señor Manini Ríos—Pero como las personas morales tienen limitaciones en sus derechos,—las limitaciones que le da la autoridad pública por razones de orden público...

Señor Ponce de León—Pero no se puede retrotraer.

Señor Manini Ríos—No se retrotrae: se pasa al Estado...

Señor Moratorio Palomeque—Apropiarse de todo, es limitarlo!—(Interrupciones).

¿Más les escuece, más interrupciones

Señor Manini Ríos—El Estado, cumpliendo los fines de caridad, no se apropió de nada; carga con un fin ya establecido; carga con una obligación que tenía una sociedad; no se apropió, por la sencilla razón de que no hay propiedad...

Señor Ponce de León—Pero, como no va a ver propiedad, señor...

